

## INSPECCIÓN 8F DE POLICIA DISTRITAL

Bogotá D.C. Treinta (30) de Abril de dos Mil Veintiuno (2.021).

Referencia Expediente No:	2020583490101151E
No. Caso ARCO:	1010320
Radicado Orfeo:	20205830228121
No. Expediente Policía/Comparendo:	11-001-6-2020-239571
Presunto Infractor	EDUARDO ENRRIQUE LUNA SAENZ
Identificación C.C No:	1192793526

### HECHOS

Mediante escrito radicado con el Nro. 20205830228121, por la oficina de contravenciones de la estación octava de policía Kennedy, remite el comparendo 11-001-6-2020-239571, en el que se impone medida correctiva al señor EDUARDO ENRRIQUE LUNA SAENZ, por violación a la ley 1801 de 2016 Artículo 35 numeral 2, *“Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades”*. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas: (...) 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.”

Se imponer como medida correctiva señalada, multa general tipo 4.

Medios de policía utilizados durante el procedimiento: Orden de policía, registro a persona y retiro del sitio.

Por reparto interno correspondió la presente actuación a la Inspección 8F- Distrital de Policía. En virtud del mismo, se **AVOCA CONOCIMIENTO** y se entra a decidir lo que en derecho corresponda.

### CONSIDERACIONES

Que teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud – OMS -; declaró el 11 de marzo del presente año, pandemia por el brote de enfermedad por coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19); situación que requeriría medidas severas de control; mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el ministro de Salud y Protección Social, declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de la misma, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID - 19 y mitigar sus efectos.

Que mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 el Presidente de la República, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, de acuerdo con el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia; con ocasión de la pandemia del COVID-19.

Que conforme al numeral 4 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, corresponde al presidente de la República, al igual que los gobernadores, alcaldes y demás autoridades policivas conservar el orden público conforme el artículo 198 de la Ley 1801 de 2016; con el fin de salvaguardar los derechos constitucionales de los habitantes del territorio nacional.

Que mediante Decreto 090 del 19 de marzo de 2020 la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.; limitó totalmente la libre circulación de vehículos y personas en el territorio del Distrito Capital de Bogotá entre el día jueves 19 de marzo de 2020 a las 23:59 horas hasta el lunes 23 de marzo de 2020.

Que el 22 de marzo del 2020 mediante Decreto 457 el Gobierno Nacional ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00

a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

Que el Gobierno Nacional; ante la evolución negativa de la crisis económica y social, a través de diferentes actos administrativos ha ordenado extender el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas que habitan la República de Colombia, contemplando diferentes formas de limitación a la libre circulación de las personas y los vehículos; de tal forma que la reactivación de diferentes sectores de la económica se ha dado de manera paulatina y supeditada siempre al cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

Que tras el pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recomienda el uso masivo de tapabocas para combatir el avance del Covid-19, el Ministerio de Salud ordenó el uso obligatorio del producto por la población en general, en diferentes espacios como el transporte público y espacios abiertos.

Que mediante Decreto 126 del 10 de mayo del 2020, ordenó el uso obligatorio de tapabocas que cubra nariz y boca para todas las personas cuando estén fuera de su domicilio, independientemente de la actividad o labor a la que salgan; de tal forma que la no utilización del tapabocas dará lugar a la imposición de las sanciones establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como las demás sanciones a que haya lugar.

Que, por lo anterior, la Alcaldesa Mayor de Bogotá en uso de sus facultades constitucionales y legales, como una acción urgente para prevenir los efectos de la pandemia global del Coronavirus; recurrió de forma transitoria y progresiva a la competencia extraordinaria de policía con el objeto de garantizar la vida y la salud de los habitantes de Bogotá D.C.; mediante el Decreto Distrital 081 del 11 de marzo de 2020.

Que de cara a lo anterior, la alcaldía mayor de Bogotá reguló mediante el Decreto Distrital 092 del 24 de marzo de 2020; las acciones necesarias para la debida ejecución de la medida de aislamiento preventivo atendiendo a diferentes factores económicos y sociales, permitiendo la circulación de las personas y vehículos que se desempeñaran o fueran indispensables para prestar o recibir ciertos servicios y labores enunciándolos de manera taxativa; de tal forma que dichas excepciones estuvieran debidamente acreditadas y autorizadas para circular atendiendo las instrucciones y observaciones de los diferentes entes Nacionales y Distritales cuya labor se concentra en prevenir la propagación del virus.

Que en cumplimiento de las instrucciones dadas por la Alcaldesa de Bogotá y el Gobierno Nacional ante la emergencia ocasionada por el SARS-Cov-2 (COVID-19), se dispuso tener como herramienta principal para garantizar y ejercer el control de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio; la aplicación y materialización de los medios y medidas correctivas establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia –CNSCC- Ley 1801 de 2016; así las cosas, quien incurra en la omisión de las disposiciones policivas impartidas por las autoridades podría incurrir en la configuración de la conducta establecida en el artículo 35 numeral 2 de la ley 1801 de 2016 que expresa:” *Artículo 35. Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas: (...) 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía*” conducta que para todos los efectos contiene la imposición de la multa general tipo 4 equivalente a treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes y participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia.

Que mediante resolución 0859 del 28 de julio del 2020; el Secretario Distrital de Gobierno de Bogotá en uso de sus facultades legales, priorizó en turno el conocimiento de la objeción de los comparendos de Policía impuestos durante el periodo de emergencia por COVID-19, respecto del artículo 35 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016 en las inspecciones de las localidades de acuerdo a la competencia territorial.

Que esta autoridad de Policía tiene plena competencia para conocer del presente asunto en virtud de lo ordenado en los artículos 206 y 223 de la ley 1801 del 2016, para lo cual avoca conocimiento del comparendo con número de Expediente Policía 2020-188407, y procede a realizar el respectivo control de legalidad del procedimiento único policivo contemplado en el artículo 222 de la ley 1801 de 2016 respecto a la imposición del mismo al ciudadano, así como la viabilidad de la imposición de la multa.

De acuerdo a lo anterior, al estudiar con detenimiento la orden de comparendo; se observa que, el funcionario adscrito a la Policía Nacional de Colombia diligenció el comparendo en debida forma; brindando todas las garantías constitucionales y legales que deben gobernar las actuaciones de todo tipo, incluida las enmarcadas dentro de la ley 1801 Código Nacional de Policía. Derecho éste que debe regir en todas y cada una de las actuaciones surtidas por parte del Estado, como lo ordena el artículo 29 de la Constitución Nacional

La situación anterior, hace que se ejercite el debido proceso y los principios de legalidad en sentido estricto, acceso a la justicia, un juicio justo, igualdad ante la ley, consecuencialmente a ello todos y cada uno de los que de ellos se desprenden o derivan, recogidos en la ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía), enmarcados dentro del artículo 8 como principios moduladores de la actuación policial.

Ahora bien, en torno a lo demandado en el artículo 8 numeral 12 y 13, del Código Nacional de Policía y en cuanto a su aplicación, tenemos como requisitos indispensables e ineludibles en todas las actuaciones policivas; los principios como el de la proporcionalidad, razonabilidad y necesidad, de la medida, que no solamente se hacen aplicables a los medios de policía, sino que consecuencialmente deben de ser tenidos en cuenta, para la imposición de la multa, que es el tema que nos ocupa.

En el estudio detallado del comparendo, el personal uniformado de la Policía Nacional aplicó medios de policía entre ellos; Orden de policía, registro a persona y retiro del sitio que, al realizar el test de proporcionalidad, junto con el principio de gradualidad de la medida, podremos decir que se cumplió con el fin constitucional que éstos conllevan; es decir, el restablecimiento del orden alterado y garantizar la sana convivencia sin que sea excesivo o desbordado.

Pues bien, para el caso que nos ocupa, encuentra el Despacho que, con las solas medidas adoptadas por el policial en esos medios de policía, se cumplió a cabalidad el fin constitucional perseguido por la norma “restablecimiento del orden alterado”; entendido esto como *“el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general y el goce de los derechos humanos”*<sup>1</sup> lo anterior, basado en la premisa de que lo promulgado en la ley 1801 del 2016 además de ser por excelencia preventiva, es persuasiva y educadora. Dicho así, se exhorta al ciudadano, para que ajuste su actuar, de tal forma que vuelva por los fueros de la “legalidad” sin reincidir o repetir los mismos comportamientos hacia el futuro.

**No obstante, en el evento de que todos esos medios preventivos, persuasivos educativos, orientadores de las normas de convivencia aplicados a la presente actuación, no fuesen tenidos en cuenta por parte del infractor y volviesen a repetirse, inevitablemente la administración tendrá que tomar medidas más drásticas en cuanto a ello.**

Por los anteriores motivos, el Despacho se abstendrá de imponer la multa que fuere señalada en el procedimiento inmediato de policía, por considerar que los medios escogidos por el oficial de policía fueron los adecuados, proporcionales, necesarios y por demás útiles, para que se lograra restablecer el orden alterado.

<sup>1</sup> Corte Constitucional, sentencia C-024/94, fórmula reiterada, entre otras, por las sentencias C-824/04, C-117/06 y C-435/13.

Por lo anteriormente expuesto, la Inspección Octava “F” Distrital de Policía, en uso de sus facultades legales, y por mandato de la ley:

**RESUELVE**

**PRIMERO:** Avalar los medios adoptados dentro del comparendo objeto dentro de la presente decisión.

**SEGUNDO:** Abstenerse de imponer medida correctiva de multa en contra de EDUARDO ENRRIQUE LUNA SAENZ identificado con la C.C. 1192793526, dentro del presente diligenciamiento respecto al comparendo No. 11-001-6-2020-239571, por los motivos mencionados en la parte motivo del presente proveído.

**TERCERO:** Ordenar que se notifique esta providencia a los interesados, por el medio más expedito para tal fin.

**CUARTO:** Disponer que contra la presente decisión no procede ningún recurso.

**QUINTO:** Archívense las presentes diligencias, junto con sus anexos en forma definitiva una vez se encuentre en firme la presente providencia y realícese su respectiva anotación en el sistema nacional de registro nacional de medidas correctivas (RNMC).

**NOTIFIQUESE Y CUMPLASE**



**ANDRES FERNANDO ZULUAGA FRANCO**  
**Inspector 8F Distrital de Policía**

Proyectó: Jayce Quevedo. Abogado FDLK.